



**Convenciones
Interamericanas
sobre Arbitraje
Comercial
Internacional**

**Inter-American
Conventions on
International
Commercial
Arbitration**

**Conventions
Interaméricaines
sur l'Arbitrage
Commercial
International**

**Convenções
Interamericanas
sobre Arbitragem
Comercial
Internacional**



Organización de los
Estados Americanos



Foreign Affairs, Trade and
Development Canada

Affaires étrangères, Commerce
et Développement Canada

OAS CATALOGING-IN-PUBLICATION DATA

Organization of American States. Secretariat for Legal Affairs. Department of International Law.

Convenciones Interamericanas sobre Arbitraje Comercial Internacional = Inter-American Conventions on International Commercial Arbitration = Conventions Interaméricaines sur l'Arbitrage Commercial International = Convenções Interamericanas sobre Arbitragem Comercial Internacional / [Preparado por el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos].

v. ; cm. (OEA documentos oficiales ; OEA/Ser.D/XIX.11)

ISBN 978-0-8270-5886-6

1. Judgments, Foreign--America. 2. Arbitration and award, International. 3. Conflict of laws--Arbitration and award--America. 4. Judicial assistance. I. Title. II. Title: Inter-American Conventions on International Commercial Arbitration. III. Title: Conventions Interaméricaines sur l'Arbitrage Commercial International. IV. Title: Convenções Interamericanas sobre Arbitragem Comercial Internacional. V. Title: Solución de controversias comerciales internacionales y arbitraje relativo al comercio.

VI. Series.

OEA/Ser.D/XIX.11

Esta publicación ha sido preparada por el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos.

Copyright © 2012. OEA. Reservados todos los derechos. Las disposiciones de las Convenciones Interamericanas sobre Arbitraje Comercial Internacional en sus cuatro idiomas pueden ser reproducidas identificando la fuente.

Impreso en los Estados Unidos de América.

Reimpresión a cargo de:

Magaly McLean, abogada principal y coordinadora de los temas de arbitraje comercial internacional, Departamento de Derecho Internacional ; y Jaime Moreno-Valle, abogado consultor, Departamento de Derecho Internacional.

OEA/Ser.D/XIX.13

Diseño de portada: Claudia Saidon, ideas@graphic-ideas.com

Foto de portada: Francisco J. Montero

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es la organización regional más antigua del mundo, ya que se remonta a la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. En esta reunión se aprobó la creación de la Unión Internacional de Repúblicas Americanas. La Carta de la OEA se suscribió en Bogotá en 1948 y entró en vigencia en diciembre de 1951. Posteriormente la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, el cual entró en vigencia en febrero de 1970; por el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985, el cual entró en vigencia en noviembre de 1988; por el Protocolo de Managua, suscrito en 1993, el cual entró en vigencia el 29 de enero de 1996; y por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, el cual entró en vigor el 25 de septiembre de 1997. En la actualidad la OEA tiene 35 Estados miembros. Además, la Organización ha otorgado categoría de Observador Permanente a varios Estados, así como a la Unión Europea.

Los propósitos esenciales de la OEA son los siguientes: afianzar la paz y la seguridad del Continente; promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención; prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados miembros; organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos; promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural, y alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros.

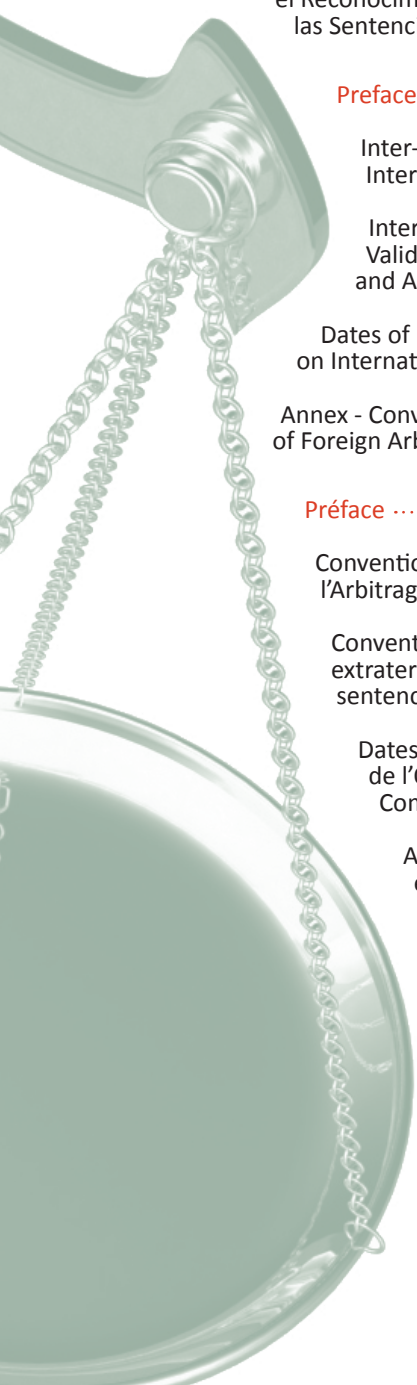
La OEA realiza sus fines por medio de los siguientes órganos: la Asamblea General; la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; los Consejos (el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral); el Comité Jurídico Interamericano; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Secretaría General; las Conferencias Especializadas; los Organismos Especializados, y otras entidades establecidas por la Asamblea General.

La Asamblea General celebra períodos ordinarios de sesiones una vez por año. En circunstancias especiales se reúne en períodos extraordinarios de sesiones. La Reunión de Consulta se convoca con el fin de considerar asuntos de carácter urgente y de interés común, y para servir de Órgano de Consulta en la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que es el principal instrumento para la acción solidaria en caso de agresión. El Consejo Permanente conoce de los asuntos que le encomienda la Asamblea General o la Reunión de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas cuando su cumplimiento no haya sido encomendado a otra entidad; vela por el mantenimiento de las relaciones de amistad entre los Estados miembros así como por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General, y además, actúa provisionalmente como Órgano de Consulta para la aplicación del TIAR. La Secretaría General es el órgano central y permanente de la OEA. La Sede tanto del Consejo Permanente como de la Secretaría General está ubicada en Washington, D.C.

ESTADOS MIEMBROS: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas (Commonwealth de las), Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica (Commonwealth de), Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.



CONTENIDO | CONTENT | CONTENU | CONTEÚDO



Prefacio	2
Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional	5
Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros	9
Fechas de ratificaciones por parte de los Estados Miembros de la OEA de las Convenciones sobre Arbitraje Comercial Internacional	13
Anexo - Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras	15
Preface	21
Inter-American Convention on International Commercial Arbitration	24
Inter-American Convention on Extraterritorial Validity of Foreign Judgments and Arbitral Awards	28
Dates of Ratification by State Parties of the Conventions on International Commercial Arbitration	31
Annex - Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards	33
Préface	39
Convention Interaméricaine sur l'Arbitrage Commercial International	42
Convention Interaméricaine sur l'efficacité extraterritoriale des décisions et sentences arbitrales étrangères	46
Dates de ratifications par les États membres de l'OEA des Conventions d'Arbitrage Commercial International	49
Annexe - Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères	51
Prefaciãr	57
Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional	60
Convenção Interamericana sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros	64
Datas das ratificações por parte dos Estados membros da OEA das Convenções sobre Arbitragem Comercial Internacional	67

Español



PREFACIO

El Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presenta en este compendio las Convenciones Interamericanas que regulan cuestiones vinculadas al arbitraje comercial internacional y al reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Dentro de éstas se encuentran la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975, en el marco de la Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional (CIDIP); y la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales, suscrita en Montevideo, Uruguay el 8 de mayo de 1979, en el contexto de la Segunda CIDIP.

El propósito de esta edición es difundir el marco jurídico interamericano promoviendo su conocimiento en pos del desarrollo del derecho internacional, buscándose con ello ampliar su aplicación en el ámbito de los ordenes internos de los Estados Miembros. Ésta publicación se enmarca dentro de las actividades del proyecto de cooperación técnica que tiene a su cargo el DDI, titulado “Arbitraje Comercial, Capacitando a los Agentes Judiciales en la Ejecución de Laudos Internacionales” que se desarrolla con el apoyo del Programa de Cooperación CIDA/OEA/2012-2015. Dicha iniciativa busca aumentar y consolidar el conocimiento de los jueces civiles y comerciales y otros funcionarios públicos del hemisferio sobre los sistemas de solución de controversias internacionales comerciales y la ejecución de decisiones y laudos arbitrales comerciales internacionales. Debe destacarse que en la actualidad el arbitraje comercial internacional es el medio más utilizado para resolver controversias privadas en el plano local e internacional, debido a su amplio alcance, confidencialidad, agilidad y flexibilidad para resolver disputas entre comerciantes en el marco de las relaciones económicas internacionales contractuales.

El objetivo del proyecto de cooperación que origina esta publicación, es consecuente con los objetivos mismos de la OEA, ya que en la Carta de la Organización expresamente establece en el Art. 18, bajo el título “Derechos y Deberes Fundamentales de los Estados”, que el respeto y la fiel observancia de los tratados constituyen normas para el desarrollo de las relaciones pacíficas entre los Estados; y el Art. 30 que consagra el compromiso de los Estados Miembros, inspirados en los principios de solidaridad y cooperación interamericanas, a aunar esfuerzos para lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y

para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones que consideran indispensables para la paz y la seguridad.

Asimismo, encuentra sustento en la Declaración de Panamá del año 1996 sobre la Contribución Interamericana al Desarrollo del Derecho Internacional, mediante la cual la Asamblea General declaró su más firme y renovado compromiso de continuar impulsando el desarrollo progresivo del Derecho Internacional Interamericano y el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional, el cual viene implementándose a través del DDI desde aquel año de conformidad con su mandato. Este Programa parte del reconocimiento del valioso patrimonio jurídico que constituyen los tratados multilaterales adoptados en el ámbito de la OEA que es necesario preservar y difundir ampliamente.

Consecuente con esos principios, entre las funciones del DDI se encuentran las de elaborar, coordinar y difundir estudios e investigaciones vinculadas al desarrollo y codificación del derecho internacional público y privado; y apoyar mediante estudios y documentos, las actividades destinadas a la unificación y armonización de las legislaciones de los Estados miembros en el campo del derecho internacional público y privado, incluyendo los aspectos jurídicos de la integración económica en el ámbito regional.

¹ AG/DEC. 12 (XXVI-0/96), *“Declaración de Panamá sobre la Contribución Americana al Desarrollo y Codificación al Derecho Internacional”*, aprobada en la sexta sesión plenaria de la Asamblea General, celebrada el 5 de junio de 1996 en Panamá.

² AG/RES. 1471 (XXVII-0/97), *“Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional”*, aprobada en la séptima sesión plenaria de la Asamblea General, celebrada el 5 de junio de 1997 en Lima, Perú.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

(Suscrita en Panamá, el 30 de enero de 1975, en la Primera Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional)



CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

(Suscrita en Panamá, el 30 de enero de 1975, en la Primera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional)

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre Arbitraje Comercial Internacional, han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Acuerdo de Partes

Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas o comunicaciones por télex.

ARTÍCULO 2

Nombramiento de Árbitros

El nombramiento de los árbitros se hará en la forma convenida por las partes. Su designación podrá delegarse a un tercero sea éste persona natural o jurídica. Los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros.

ARTÍCULO 3

Reglas Aplicables

A falta de acuerdo expreso entre las partes el arbitraje se llevará a cabo conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial.

ARTÍCULO 4

Ejecutoriedad. Reconocimiento de Laudos

Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o reglas procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada. Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros, según las leyes procesales del país donde se ejecuten, y lo que establezcan al respecto los tratados internacionales.

ARTÍCULO 5

Causales de Denegación de Reconocimiento

1. Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a solicitud de la parte contra la cual es invocada, si ésta prueba ante la autoridad competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la ejecución:
 - a. Que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiere indicado a este respecto, en virtud de la ley del Estado en que se haya dictado la sentencia; o
 - b. Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no haya sido debidamente notificada de la designación del arbitro o del

- procedimiento de arbitraje o no haya podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o
- c. Que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el acuerdo de las partes de sometimiento al procedimiento arbitral; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no hayan sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o
 - d. Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se hayan ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se hayan ajustado a la ley del Estado donde se haya efectuado el arbitraje; o
 - e. Que la sentencia no sea aún obligatoria para las partes o haya sido anulada o suspendida por una autoridad competente del Estado en que, o conforme a cuya ley, haya sido dictada esa sentencia.
2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba:
 - a. Que, según la ley de este Estado, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o
 - b. Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean contrarios al orden público del mismo Estado.

ARTÍCULO 6

Anulación o Suspensión de la Sentencia

Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el Artículo 5, párrafo 1 e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a solicitud de la parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que otorgue garantías apropiadas.

ARTÍCULO 7

Firma

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

ARTÍCULO 8

Ratificaciones

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

ARTÍCULO 9

Adhesiones

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

ARTÍCULO 10

Entrada en Vigor

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

ARTÍCULO 11

Multiplidad de Unidades Territoriales

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones posteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones posteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.

ARTÍCULO 12

Vigencia

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.

ARTÍCULO 13

Instrumentos Originales. Idiomas

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Dicha Secretaría notificará a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También les transmitirá las declaraciones previstas en el Artículo 11 de la presente Convención.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman la presente Convención.

HECHA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, República de Panamá, el día treinta de enero de mil novecientos setenta y cinco.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS Y LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS

(Suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979, en la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional)



CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS Y LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS

(Suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979, en la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional)

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos,

CONSIDERANDO:

Que la administración de justicia en los Estados Americanos requiere su mutua cooperación para los efectos de asegurar la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales dictados en sus respectivas jurisdicciones territoriales, han acordado lo siguiente:

ARTICULO 1

Aplicación

La presente Convención se aplicará a las sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales o laborales en uno de los Estados Partes, a menos que al momento de la ratificación alguno de estos haga expresa reserva de limitarla a las sentencias de condena en materia patrimonial. Asimismo, cualquiera de ellos podrá declarar al momento de ratificarla que se aplica también a las resoluciones que terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional y a las sentencias penales en cuanto se refieran a la indemnización de perjuicios derivados del delito.

Las normas de la presente Convención se aplicarán en lo relativo a laudos arbitrales en todo lo no previsto en la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975.

ARTÍCULO 2

Requisitos de Fondo

Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros a que se refiere el artículo 1, tendrán eficacia extraterritorial en los Estados Partes si reúnen las condiciones siguientes:

- a. Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el Estado de donde proceden;
- b. Que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los documentos anexos que fueren necesarios según la presente Convención, estén debidamente traducidos al idioma oficial del Estado donde deban surtir efecto;
- c. Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir efecto;
- d. Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto;
- e. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada

por la ley del Estado donde la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional deban surtir efecto;

- f. Que se haya asegurado la defensa de las partes;
- g. Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que fueron dictados;
- h. Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución.

ARTÍCULO 3

Requisitos de Forma

Los documentos de comprobación indispensables para solicitar el cumplimiento de las sentencias, laudos y resoluciones jurisdiccionales son los siguientes:

- a. Copia auténtica de la sentencia o del laudo y resolución jurisdiccional;
- b. Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cumplimiento a los incisos e) y f) del artículo anterior;
- c. Copia auténtica del auto que declare que la sentencia o el laudo tiene el carácter de ejecutoriado o fuerza de cosa juzgada.

ARTÍCULO 4

Eficacia Total o Parcial

Si una sentencia, laudo y resolución jurisdiccional extranjeros no pueden tener eficacia en su totalidad, el Juez o tribunal podrá admitir su eficacia parcial mediante petición de parte interesada.

ARTÍCULO 5

Beneficio de Pobreza

El beneficio de pobreza reconocido en el Estado de origen de la sentencia será mantenido en el de su presentación.

ARTÍCULO 6

Procedimientos Aplicables

Los procedimientos, incluso la competencia de los respectivos órganos judiciales, para asegurar la eficacia a las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros serán regulados por la ley del Estado en que se solicita su cumplimiento.

ARTÍCULO 7

Firma

La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

ARTÍCULO 8

Ratificaciones

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

ARTÍCULO 9

Adhesiones

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

ARTÍCULO 10

Reservas

Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una o más disposiciones específicas y que no sea incompatible con el objeto y fin de la Convención.

ARTÍCULO 11

Entrada en Vigor

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.

Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

ARTÍCULO 12

Multiplidad de Unidades Territoriales

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones posteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones posteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.

ARTÍCULO 13

Denuncia

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.

ARTÍCULO 14

Depósito, Firma y Ratificaciones

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados

Miembros de dicha Organización y a los Estados que hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiera. También les transmitirá las declaraciones previstas en el artículo 12 de la presente Convención.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.

HECHA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, República Oriental del Uruguay, el día ocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve.

FECHAS DE RATIFICACIONES POR PARTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA DE LAS CONVENCIONES SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA	CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL (CONVENCIÓN DE PANAMÁ 1975)	CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE LAS SENTENCIAS Y LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS (CONVENCIÓN DE MONTEVIDEO 1979)	CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS (CONVENCIÓN DE NUEVA YORK 1958)
Antigua y Barbuda	-	-	02/02/1989
Argentina	11/03/1994	11/07/1983	14/03/1989
Bahamas	-	-	20/12/2006
Barbados	-	-	16/03/1993
Belice	-	-	-
Bolivia	10/08/1998	05/15/1998	28/04/1995
Brasil	08/31/1995	08/31/1995	07/06/2002
Canadá	-	-	12/05/1986
Chile	04/08/1976	-	04/09/1975
Colombia	11/18/1986	06/24/1981	25/09/1979
Costa Rica	01/02/1978	-	26/10/1987
Dominica	-	-	28/10/1988
Ecuador	08/06/1991	05/05/1982	03/01/1962
El Salvador	06/27/1980	-	26/02/1998
Estados Unidos	11/10/1986	-	30/09/1970
Grenada	-	-	-
Guatemala	07/07/1986	-	21/03/1984
Guyana	-	-	-
Haití	-	-	05/12/1983
Honduras	01/08/1979	-	03/10/2000
Jamaica	-	-	10/07/2002
México	02/15/1978	02/11/1987	14/04/1971
Nicaragua	07/15/03	-	24/09/2003
Panamá	11/11/1975	-	10/10/1984
Paraguay	12/02/1976	07/05/1986	08/10/1997
Perú	05/02/1989	04/09/1980	07/07/1988
República Dominicana	02/11/2008	-	11/04/2002
Saint Kitts y Nevis	-	-	-
Santa Lucía	-	-	-
San Vicente y las Granadinas	-	-	12/09/2000
Suriname	-	-	-
Trinidad y Tobago	-	-	14/02/1966
Uruguay	03/29/1977	02/12/1980	30/03/1983
Venezuela	03/22/1985	01/30/1985	08/02/1995

Fuente: Elaborado por el Departamento de Derecho Internacional de la Organización de los Estados Americanos.

ANEXO - CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS

(Suscrita en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de junio de 1958)



ANEXO - CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS

(Suscrita en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de junio de 1958)

ARTÍCULO I

1. La presente Convención se aplicara al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquél en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas. Se aplicara también a las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución.
2. La expresión "sentencia arbitral" no solo comprenderá las sentencias dictadas por los árbitros nombrados para casos determinados, sino también las sentencias dictadas por los órganos arbitrales permanentes a los que las partes se hayan sometido.
3. En el momento de firmar o de ratificar la presente Convención, de adherirse a ella o de hacer la notificación de su extensión prevista en el Artículo X, todo Estado podrá, a base de reciprocidad, declarar que aplicará la presente Convención al reconocimiento y a la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado Contratante únicamente. Podrá también declarar que sólo aplicará la Convención a los litigios surgidos de relaciones jurídicas, sean o no contractuales, consideradas comerciales por su derecho interno.

ARTÍCULO II

1. Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje.
2. La expresión "acuerdo por escrito" denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas.
3. El tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable.

ARTÍCULO III

Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente Convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales.

ARTÍCULO IV

1. Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el artículo anterior, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá presentar, junto con la demanda:
 - a) El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad;
 - b) El original del acuerdo a que se refiere el Artículo II, o una copia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad.
2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del país en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta última deberá presentar una traducción a ese idioma de dichos documentos. La traducción deberá ser certificada por un traductor oficial o un traductor jurado, o por un agente diplomático o consular.

ARTÍCULO V

1. Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución:
 - a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el Artículo II estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que le es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la Ley del país en que se haya dictado la sentencia; o
 - b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o
 - c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o
 - d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o
 - e) Que la sentencia no es aun obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia.
2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba:
 - a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o
 - b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país.

ARTÍCULO VI

Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el Artículo V, párrafo 1 e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a instancia de la parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que dé garantías apropiadas.

ARTÍCULO VII

1. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales concertados por los Estados Contratantes ni privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados del país donde dicha sentencia se invoque.
2. El Protocolo de Ginebra de 1923 relativo a las cláusulas de arbitraje y la Convención de Ginebra de 1927 sobre la ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras dejarán de surtir efectos entre los Estados Contratantes a partir del momento y en la medida en que la presente Convención tenga fuerza obligatoria para ellos.

ARTÍCULO VIII

1. La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1958 a la firma de todo Miembro de las Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado que sea o llegue a ser miembro de cualquier organismo especializado de las Naciones Unidas, o sea o llegue a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o de todo otro Estado que haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. La presente Convención deberá ser ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO IX

1. Podrán adherirse a la presente Convención todos los Estados a que se refiere el Artículo VIII.
2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO X

1. Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, que la presente Convención se hará extensiva a todos los territorios cuyas relaciones internacionales tenga a su cargo, o a uno o varios de ellos. Tal declaración surtirá efecto a partir del momento en que la Convención entre en vigor para dicho Estado.
2. Posteriormente, esa extensión se hará en cualquier momento por notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y surtirá efecto a partir del nonagésimo día siguiente a la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido tal notificación o en la fecha de entrada en vigor de la Convención para tal Estado, si esta última fecha fuere posterior.

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la presente Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, cada Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación de la presente Convención a tales territorios, a reserva del consentimiento de sus gobiernos cuando sea necesario por razones constitucionales.

ARTÍCULO XI

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones siguientes:

- a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la competencia legislativa del poder federal, las obligaciones del gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que las de los Estados Contratantes que no son Estados federales;
- b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de la competencia legislativa de cada uno de los Estados o provincias constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su recomendación favorable, pondrá dichos artículos en conocimiento de las autoridades competentes de los Estados o provincias constituyentes;
- c) Todo Estado federal que sea Parte en la presente Convención proporcionará, a solicitud de cualquier otro Estado Contratante que le haya sido transmitida por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, una exposición de la legislación y de las prácticas vigentes en la federación y en sus entidades constituyentes con respecto a determinada disposición de la Convención, indicando la medida en que por acción legislativa o de otra índole, se haya dado efecto a tal disposición.

ARTÍCULO XII

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito del tercer instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Respecto a cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después del depósito del tercer instrumento de ratificación o de adhesión, la presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión.

ARTÍCULO XIII

1. Todo Estado Contratante podrá denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.
2. Todo Estado que haya hecho una declaración o enviado una notificación conforme a lo previsto en el Artículo X, podrá declarar en cualquier momento posterior, mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que la Convención dejará de aplicarse al territorio de que se trate un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido tal notificación.

3. La presente Convención seguirá siendo aplicable a las sentencias arbitrales respecto de las cuales se haya promovido un procedimiento para el reconocimiento o la ejecución antes de que entre en vigor la denuncia.

ARTÍCULO XIV

Ningún Estado Contratante podrá invocar las disposiciones de la presente Convención respecto de otros Estados Contratantes más que en la medida en que el mismo este obligado a aplicar esta Convención.

ARTÍCULO XV

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados a que se refiere el artículo VIII:

- a) Las firmas y ratificaciones previstas en el Artículo VIII;
- b) Las adhesiones previstas en el Artículo IX;
- c) Las declaraciones y notificaciones relativas a los artículos I, X y XI;
- d) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención, en conformidad con el Artículo XII;
- e) Las denuncias y notificaciones previstas en el Artículo XIII.

ARTÍCULO XVI

1. La presente Convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso serán igualmente auténticos, será depositada en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá una copia certificada de la presente Convención a los Estados a que se refiere el Artículo VIII.

English



PREFACE

The Department of International Law (DIL) at the Organization of American States' Secretariat for Legal Affairs presents this compilation of Inter-American Conventions on international commercial arbitration, and the cross-border recognition and enforcement of arbitral decisions. These include: the *Inter-American Convention on International Commercial Arbitration*, signed in Panama on January 30, 1975, after the First Inter-American Specialized Conference on Private International Law (CIDIP); the *Inter-American Convention on the Extraterritorial Validity of Foreign Judgments and Arbitral Awards*, signed in Montevideo, Uruguay on May 8, 1979, in the wake of the Second CIDIP.

The objective of this publication is to develop international law through the promotion of the Inter-American legal norms. It aims to do so by increasing regional knowledge of these principles and their application within Member States. This book has been created within the framework of the Department of International Law's "*International Commercial Arbitration: Training Judicial Officers in Cross-Border Decision Enforcement*" initiative, a project developed in cooperation with the Canadian International Development Association (CIDA/OAS/2012-2015). This project aims to strengthen and improve judges' and public officials' knowledge of international trade dispute resolution mechanisms, and the cross-border enforcement of arbitral awards throughout the region. It is important to note that, currently, international commercial arbitration is the dispute resolution mechanism most commonly used to resolve private business controversies, both locally and internationally. This is due to its broad scope, confidentiality, agility, and flexibility in resolving disputes between business actors during the course of their international contractual relationships.

The purposes of this cooperative initiative, in which this publication plays an important role, correspond with the Organization of American States' overall institutional objectives: the OAS' Charter expressly establishes in "Fundamental Rights and Duties of the States," Art. 18, that "respect for and the faithful observance of treaties constitute standards for the development of peaceful relations among States;" Art. 30 enshrines the principles of Inter-American "solidarity and cooperation," that states must "uni[fy] effort[s] to ensure international social justice in their relations and integral development for their peoples, as conditions essential to peace and security."

The project's legal foundations also include the 1996 Panama Declaration on the Inter-American Contribution to the Development of International Law, in which the General Assembly confirmed and renewed its strong commitment to continuing to promote the progressive development of inter-American international law. Likewise, the project exists as a result of the Inter-American Program for the Development of International Law, which the DIL has been working to implement since 1997, in accordance with its mandate. This project derives from and recognizes the value of the legal patrimony contained within the multilateral treaties adopted in the context of the Organization of American States, and need to preserve and publicize them.

In accordance with these principles, among its many functions, the DIL carries out, coordinates, and publishes studies and research related to the development and codification of public and private international law. Through the documents and studies it produces, the DIL supports the unification and harmonization of Member State legislation in areas related to public and private international law, including the legal aspects of regional economic integration.

¹ AG/DEC. 12 (XXVI-0/96), "Panama Declaration on the American Contribution to the Development and Codification of International Law," approved in the sixth plenary session of the General Assembly, held on June 5th, 1996 in Panama.

² AG/RES. 1471 (XXVII-0/97), "Inter-American Program for the Development of International Law," approved in the seventh plenary session of the General Assembly, held on June 5th, 1997 in Lima, Peru.

**INTER-AMERICAN CONVENTION
ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION**
(Signed at Panama, January 30, 1975, at the First Inter-American Specialized
Conference on Private International Law)



INTER-AMERICAN CONVENTION ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

(Signed at Panama, January 30, 1975, at the First Inter-American Specialized Conference on Private International Law)

The Governments of the Member States of the Organization of American States desirous of concluding a convention on international commercial arbitration have agreed as follows:

ARTICLE 1

Parties' Agreement

An agreement in which the parties undertake to submit to arbitral decision any differences that may arise or have arisen between them with respect to a commercial transaction is valid. The agreement shall be set forth in an instrument signed by the parties, or in the form of an exchange of letters, telegrams, or telex communications.

ARTICLE 2

Appointment of Arbitrators

Arbitrators shall be appointed in the manner agreed upon by the parties. Their appointment may be delegated to a third party, whether a natural or juridical person. Arbitrators may be nationals or foreigners.

ARTICLE 3

Applicable Rules

In the absence of an express agreement between the parties, the arbitration shall be conducted in accordance with the rules of procedure of the Inter-American Commercial Arbitration Commission.

ARTICLE 4

Execution. Recognition of Arbitral Decisions

An arbitral decision or award that is not appealable under the applicable law or procedural rules shall have the force of a final judicial judgment. Its execution or recognition may be ordered in the same manner as that of decisions handed down by national or foreign ordinary courts, in accordance with the procedural laws of the country where it is to be executed and the provisions of international treaties.

ARTICLE 5

Grounds for Refusal of Recognition and Execution

1. The recognition and execution of the decision may be refused, at the request of the party against which it is made, only if such party is able to prove to the competent authority of the State in which recognition and execution are requested:
 - a. That the parties to the agreement were subject to some incapacity under the applicable law or that the agreement is not valid under the law to which the parties have submitted it, or, if such law is not specified, under the law of the State in which the decision was made; or
 - b. That the party against which the arbitral decision has been made was not duly notified of the appointment of the arbitrator or of the arbitration procedure to be followed, or was unable, for any other reason, to present his defense; or
 - c. That the decision concerns a dispute not envisaged in the

agreement between the parties to submit to arbitration; nevertheless, if the provisions of the decision that refer to issues submitted to arbitration can be separated from those not submitted to arbitration, the former may be recognized and executed; or

- d. That the constitution of the arbitral tribunal or the arbitration procedure has not been carried out in accordance with the terms of the agreement signed by the parties or, in the absence of such agreement, that the constitution of the arbitral tribunal or the arbitration procedure has not been carried out in accordance with the law of the State where the arbitration took place; or
 - e. That the decision is not yet binding on the parties or has been annulled or suspended by a competent authority of the State in which, or according to the law of which, the decision has been made.
2. The recognition and execution of an arbitral decision may also be refused if the competent authority of the State in which the recognition and execution is requested finds:
 - a. That the subject of the dispute cannot be settled by arbitration under the law of that State; or
 - b. That the recognition or execution of the decision would be contrary to the public policy ("order public") of that State.

ARTICLE 6

Quashing or Suspending a Decision

If the competent authority mentioned in Article 5. 1. e has been requested to annul or suspend the arbitral decision, the authority before which such decision is invoked may, if it deems it appropriate, postpone a decision on the execution of the arbitral decision and, at the request of the party requesting execution, may also instruct the other party to provide appropriate guaranties.

ARTICLE 7

Signature

This Convention shall be open for signature by the Member States of the Organization of American States.

ARTICLE 8

Ratification

This Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States.

ARTICLE 9

Accession

This Convention shall remain open for accession by any other State. The instruments of accession shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States.

ARTICLE 10

Entry into Force

This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification.

For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the second instrument of ratification, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

ARTICLE 11

Multiplicity of Legal Systems

If a State Party has two or more territorial units in which different systems of law apply in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of signature, ratification or accession, declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them.

Such declaration may be modified by subsequent declarations, which shall expressly indicate the territorial unit or units to which the Convention applies. Such subsequent declarations shall be transmitted to the General Secretariat of the Organization of American States, and shall become effective thirty days after the date of their receipt.

ARTICLE 12

Denunciation

This Convention shall remain in force indefinitely, but any of the States Parties may denounce it. The instrument of denunciation shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States. After one year from the date of deposit of the instrument of denunciation, the Convention shall no longer be in effect for the denouncing State, but shall remain in effect for the other States Parties.

ARTICLE 13

Original Instruments. Languages

The original instrument of this Convention, the English, French, Portuguese and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States. The Secretariat shall notify the Member States of the Organization of American States and the States that have acceded to the Convention of the signatures, deposits of instruments of ratification, accession, and denunciation as well as of reservations, if any. It shall also transmit the declarations referred to in Article 11 of this Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

DONE AT PANAMA CITY, Republic of Panama, this thirtieth day of January one thousand nine hundred and seventy-five.

**INTER-AMERICAN CONVENTION
ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION**
(Signed at Montevideo, Uruguay, May 8, 1979, at the Second Inter-American
Specialized Conference on Private International Law)



INTER-AMERICAN CONVENTION ON EXTRATERRITORIAL VALIDITY OF FOREIGN JUDGMENTS AND ARBITRAL AWARDS

(Signed at Montevideo, Uruguay, May 8, 1979, at the Second Inter-American Specialized Conference on Private International Law)

The Governments of the Member States of the Organization of American States,

CONSIDERING that the administration of justice in the American States requires their mutual cooperation for the purpose of ensuring the extraterritorial validity of judgments and arbitral awards rendered in their respective territorial jurisdictions, have agreed as follows:

ARTICLE 1

Applicability

This Convention shall apply to judgments and arbitral awards rendered in civil, commercial or labor proceedings in one of the States Parties, unless at the time of ratification it makes an express reservation to limit the Convention to compensatory judgments involving property. In addition, any one of them may declare, when ratifying the Convention that it also applies to rulings that end proceedings, to the decisions of authorities that exercise some jurisdictional function and to judgments in penal proceedings ordering compensation for damages resulting from an offense.

The rules of this Convention shall apply to arbitral awards in all matters not covered by the Inter-American Convention on International Commercial Arbitration, signed in Panama on January 30, 1975.

ARTICLE 2

Substantive Requirements

The foreign judgments, awards and decisions referred to in Article 1 shall have extraterritorial validity in the States Parties if they meet the following conditions:

- a) They fulfill all the formal requirements necessary for them to be deemed authentic in the State of origin;
- b) The judgment, award or decision and the documents attached thereto that are required under this Convention are duly translated into the official language of the State where they are to take effect;
- c) They are presented duly legalized in accordance with the law of the State in which they are to take effect;
- d) The judge or tribunal rendering the judgment is competent in the international sphere to try the matter and to pass judgment on it in accordance with the law of the State in which the judgment, award or decision is to take effect;
- e) The plaintiff has been summoned or subpoenaed in due legal form substantially equivalent to that accepted by the law of the State where the judgment, award or decision is to take effect;
- f) The parties had an opportunity to present their defense;
- g) They are final or, where appropriate, have the force of res

judicata in the State in which they were rendered;

- h) They are not manifestly contrary to the principles and laws of the public policy (order public) of the State in which recognition or execution is sought.

ARTICLE 3

Execution Requirements

The documents of proof required to request execution of judgments, awards and decisions are as follows:

- a) A certified copy of the judgment, award or decision;
- b) A certified copy of the documents proving that the provisions of items (e) and (f) of the foregoing article have been complied with; and
- c) A certified copy of the document stating that the judgment, award or decision is final or has the force of res judicata.

ARTICLE 4

Total or Partial Executability

If a foreign judgment, award or decision cannot be executed in its entirety, the judge or tribunal may agree to its partial execution at the request of an interested party.

ARTICLE 5

In Forma Pauperis

A declaration in forma pauperis recognized in the State of origin of the judgment shall be recognized in the State of destination.

ARTICLE 6

Applicable Proceedings

The procedures for ensuring the validity of foreign judgments, awards and decisions, including the jurisdiction of the respective judges and tribunals, shall be governed by the law of the State in which execution is sought.

ARTICLE 7

Signature

This Convention shall be open for signature by the Member States of the Organization of American States.

ARTICLE 8

Ratification

This Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States.

ARTICLE 9

Accession

This Convention shall remain open for accession by any other State. The instrument of accession shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States.

ARTICLE 10

Reservations

Each State may, at the time of signature, ratification or accession, make reservations to this Convention, provided that each reservation concerns one or more specific provisions and is not incompatible with the object and purpose of the Convention.

ARTICLE 11

Entry into Force

This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification.

For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the second instrument of ratification, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

ARTICLE 12

Multiplicity of Legal Systems

If a State Party has two or more territorial units in which different systems of law apply in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of signature, ratification or accession, declare that this Convention shall extend to all its territorial units or only to one or more of them.

Such declaration may be modified by subsequent declarations, which shall expressly indicate the territorial unit or units to which this Convention applies. Such subsequent declarations shall be transmitted to the General Secretariat of the Organization of American States and shall become effective thirty days after the date of their receipt.

ARTICLE 13

Denunciation

This Convention shall remain in force indefinitely, but any of the States Parties may denounce it. The instrument of denunciation shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States. After one year from the date of deposit of the instrument of denunciation, the Convention shall no longer be in effect for the denouncing State, but shall remain in effect for the other States Parties.

ARTICLE 14

Deposit, Signature, and Ratifications

The original instrument of this Convention, the English, French, Portuguese and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited with the General Secretariat of the Organization of American States, which will forward an authenticated copy of its text to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of its Charter. The General Secretariat of the Organization of American States shall notify the Member States of that Organization and the States that have acceded to the Convention of the signatures, deposits of instruments of ratification, accession and denunciation as well as of reservations, if any. It shall also transmit the declarations referred to in Article 12 of this Convention.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

DONE AT MONTEVIDEO, Republic of Uruguay, this eighth day of May, one thousand nine hundred and seventy-nine.

Dates of Ratification by State Parties of the Conventions on International Commercial Arbitration

MEMBERS OF THE ORGANIZATION OF THE AMERICAN STATES	INTER-AMERICAN CONVENTION ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION (PANAMA CONVENTION 1975)	INTER-AMERICAN CONVENTION ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION (MONTEVIDEO CONVENTION 1979)	CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS (NEW YORK CONVENTION 1958)
Antigua and Barbuda	-	-	02/02/1989
Argentina	11/03/1994	11/07/1983	14/03/1989
The Bahamas	-	-	20/12/2006
Barbados	-	-	16/03/1993
Belize	-	-	-
Bolivia	10/08/1998	05/15/1998	28/04/1995
Brazil	08/31/1995	08/31/1995	07/06/2002
Canada	-	-	12/05/1986
Chile	04/08/1976	-	04/09/1975
Colombia	11/18/1986	06/24/1981	25/09/1979
Costa Rica	01/02/1978	-	26/10/1987
Dominica	-	-	28/10/1988
Ecuador	08/06/1991	05/05/1982	03/01/1962
El Salvador	06/27/1980	-	26/02/1998
Grenada	-	-	-
Guatemala	07/07/1986	-	21/03/1984
Guyana	-	-	-
Haiti	-	-	05/12/1983
Honduras	01/08/1979	-	03/10/2000
Jamaica	-	-	10/07/2002
Mexico	02/15/1978	02/11/1987	14/04/1971
Nicaragua	07/15/2003	-	24/09/2003
Panama	11/11/1975	-	10/10/1984
Paraguay	12/02/1976	07/05/1986	08/10/1997
Peru	05/02/1989	04/09/1980	07/07/1988
Dominican Republic	02/11/2008	-	11/04/2002
Saint Kitts and Nevis	-	-	-
Saint Lucia	-	-	-
Saint Vincent and the Grenadines	-	-	12/09/2000
Suriname	-	-	-
Trinidad and Tobago	-	-	14/02/1966
United States	11/10/1986	-	30/09/1970
Uruguay	03/29/1977	02/12/1980	30/03/1983
Venezuela	03/22/1985	01/30/1985	08/02/1995

Source: Prepared by the Department of International Law of Organization of American States.

**ANNEX - CONVENTION ON THE
RECOGNITION AND ENFORCEMENT
OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS**

(Signed at New York, United States, June 10, 1958)



ANNEX - CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS

(Signed at New York, United States, June 10, 1958)

ARTICLE I

1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.
2. The term "arbitral awards" shall include not only awards made by arbitrators appointed for each case but also those made by permanent arbitral bodies to which the parties have submitted.
3. When signing, ratifying or acceding to this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State. It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration.

ARTICLE II

1. Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship whether contractual or not, concerning a subject-matter capable of settlement by arbitration.
2. The term "agreement in writing" shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams.
3. The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article shall at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.

ARTICLE III

Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards.

ARTICLE IV

1. To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preceding article, the party applying for recognition and enforcement shall, at the time of the application, supply:

- a) The duly authenticated original award or a duly certified copy thereof.
 - b) The original agreement referred to in article II or a duly certified copy thereof.
2. If the said award or agreement is not made in an official language of the country in which the award is relied upon, the party applying for recognition and enforcement of the award shall produce a translation of these documents into such language. The translation shall be certified by an official or sworn translator or by a diplomatic or consular agent.

ARTICLE V

1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:
 - a) The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or
 - b) The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or
 - c) The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or
 - d) The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place; or
 - e) The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.
2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:
 - a) The subject-matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or
 - b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.

ARTICLE VI

If an application for the setting aside or suspension of the award has been made to a competent authority referred to in article V(1)(e), the authority before which the award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award and may also, on the application of the party claiming enforcement of the award, order the other party to give suitable security.

ARTICLE VII

1. The provisions of the present Convention shall not affect the validity of multilateral or bilateral agreements concerning the recognition and enforcement of arbitral awards entered into by the Contracting States nor deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon.
2. The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923 and the Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927 shall cease to have effect between Contracting States on their becoming bound and to the extent that they become bound, by this Convention.

ARTICLE VIII

1. This Convention shall be open until December 31, 1958 for signature on behalf of any Member of the United Nations and also on behalf of any other State which is or hereafter becomes a member of any specialized agency of the United Nations, or which is or hereafter becomes a party to the Statute of the International Court of Justice, or any other State to which an invitation has been addressed by the General Assembly of the United Nations.
2. This Convention shall be ratified and the instrument of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

ARTICLE IX

1. This Convention shall be open for accession to all States referred to in article VIII.
2. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

ARTICLE X

1. Any State may, at the time of signature, ratification or accession, declare that this Convention shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible. Such a declaration shall take effect when the Convention enters into force for the State concerned.
2. At any time thereafter any such extension shall be made by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this notification, or as from the date of entry into force of the Convention for the State concerned, whichever is the later.
3. With respect to those territories to which this Convention is not extended at the time of signature, ratification or accession, each State concerned shall consider the possibility of taking the necessary steps in order to extend the application of this Convention to such territories, subject, where necessary for constitutional reasons, to the consent of the Governments of such territories.

ARTICLE XI

In the case of a federal or non-unitary State, the following provisions shall apply:

- a) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of the federal authority, the obligations of the federal Government shall to this extent be the same as those of Contracting States which are not federal States;
- b) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of constituent states or provinces which are not, under the constitutional system of the federation, bound to take legislative action, the federal Government shall bring such articles with a favorable recommendation to the notice of the appropriate authorities of constituent states or provinces at the earliest possible moment;
- c) A federal State Party to this Convention shall at the request of any other Contracting State transmitted through the Secretary-General of the United Nations, supply a statement of the law and practice of the federation and its constituent units in regard to any particular provision of this Convention, showing the extent to which effect has been given to that provision by legislative or other action.

ARTICLE XII

1. This Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of the third instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after deposit of such State of its instrument of ratification or accession.

ARTICLE XIII

1. Any Contracting State may denounce this Convention by a written notification to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.
2. Any State which has made a declaration or notification under article X may, at any time thereafter, by notification to the Secretary-General of the United Nations, declare that this Convention shall cease to extend to the territory concerned one year after the date of the receipt of the notification by the Secretary-General.
3. This Convention shall continue to be applicable to arbitral awards in respect of which recognition or enforcement proceedings have been instituted before the denunciation takes effect.

ARTICLE XIV

A Contracting State shall not be entitled to avail itself of the present Convention against other Contracting States except to the extent that it is itself bound to apply the Convention.

ARTICLE XV

The Secretary-General of the United Nations shall notify the States contemplated in article VIII of the following:

- a) Signatures and ratifications in accordance with article VIII;

- b) Accessions in accordance with article IX;
- c) Declarations and notifications under article I, X and XI;
- d) The date upon which this Convention enters into force in accordance with article XII;
- e) Denunciations and notifications in accordance with article XIII.

ARTICLE XVI

1. This Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts shall be equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit a certified copy of this Convention to the States contemplated in article VIII.

Français



PRÉFACE

Le Département de droit international (DDI) du Secrétariat aux questions juridiques de l'Organisation des États Américains (OEA) présente dans ce recueil les conventions interaméricaines qui régissent les questions liées à l'arbitrage commercial international ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution de sentences arbitrales étrangères. Au nombre de celles-ci, mentionnons la *Convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial international*, signée à Panama le 30 janvier 1975, dans le cadre de la Première Conférence spécialisée interaméricaine de droit international (CIDIP), et la *Convention interaméricaine sur l'efficacité extraterritoriale des décisions et sentences arbitrales étrangères*, signée à Montevideo (Uruguay) le 8 mai 1979, dans le cadre de la deuxième CIDIP.

Cette édition a pour but de diffuser le cadre juridique interaméricain en encourageant la connaissance de celui-ci afin de favoriser le développement du droit international, cherchant par là à élargir son application dans le domaine des ordres juridiques internes des États membres. La présente publication s'insère dans le cadre des activités du projet de coopération technique dont le DDI a la charge, intitulé "*L'arbitrage commercial, formation des huissiers de justice dans l'exécution des sentences internationales*", qui reçoit le soutien du *Programme de coopération ACDI/OEA/2012-2015*. Cette initiative vise à accroître et à consolider les connaissances des juges des tribunaux civils et de commerce ainsi que d'autres fonctionnaires publics du Continent américain en ce qui concerne les systèmes de règlement de différends commerciaux internationaux ainsi que l'exécution de décisions et de sentences arbitrales commerciales internationales.

Il est important de souligner que l'arbitrage commercial international est actuellement la façon la plus utilisée de régler des différends privés sur le plan local et international, étant donné sa grande portée, sa confidentialité, sa souplesse et sa flexibilité pour régler des différends entre commerçants dans le cadre des relations économiques internationales contractuelles.

L'objectif visé par le projet de coopération à l'origine de la présente publication est en harmonie avec les objectifs de l'OEA elle-même, étant donné que la Charte de l'Organisation établit expressément, en son article 18, sous le titre "Droits et devoirs fondamentaux des États", que "le respect et l'observance fidèle des traités sont de règle pour le développement des relations pacifiques entre les États"; et l'article 30 de la Charte, qui consacre l'engagement des États membres, inspirés des principes de "solidarité et de coopération" interaméricaines, à "unir leurs

efforts afin que règne la justice sociale internationale dans leurs relations et que leurs peuples atteignent un développement intégral, conditions qu'ils considèrent indispensables pour la paix et la sécurité."

En outre, cet objectif est appuyé dans la Déclaration de Panama de 1996 sur la contribution interaméricaine au développement et à la codification du droit international, par laquelle l'Assemblée générale a déclaré son engagement ferme et renouvelé de continuer à encourager le développement progressif du droit international interaméricain et le Programme interaméricain de développement du droit international, lequel est mis en œuvre par le truchement du DDI depuis ce temps, conformément à son mandat. Ce programme prend pour point de départ la reconnaissance du précieux patrimoine juridique que constituent les traités multilatéraux adoptés dans le cadre de l'OEA, qu'il est nécessaire de préserver et de diffuser largement.

Conformément à ces principes, le DDI compte, au nombre de ses fonctions, l'élaboration, la coordination et la diffusion d'études et de recherches liées au développement et à la codification du droit international public et privé; l'appui, au moyen d'études et de documents, aux activités visant l'unification et l'harmonisation des législations des États membres dans le domaine du droit international public et privé, y compris les facettes juridiques de l'intégration économique à l'échelle régionale.

¹ AG/DEC. 12 (XXVI-0/96), "Déclaration de Panama sur la contribution interaméricaine au développement et à la codification du droit international", adoptée lors de la sixième séance plénière de l'Assemblée générale, tenue le 5 juin 1996 à Panama.

² AG/RES. 1471 (XXVII-0/97), "Programme interaméricain de développement du droit international", adoptée lors de la septième séance plénière de l'Assemblée générale, tenue le 5 juin 1997 à Lima (Pérou).

CONVENTION INTERAMÉRICAINNE SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL

(Signée à Panama le 30 Janvier 1975, lors de la Première Conférence
spécialisée interaméricaine de droit international privé)



CONVENTION INTERAMÉRICAINNE SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL

(Signée à Panama le 30 Janvier 1975, lors de la Première Conférence spécialisée interaméricaine de droit international privé)

Les Gouvernements des États membres de l'Organisation des États Américains, désireux de conclure une Convention sur l'Arbitrage commercial international, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE 1

Accord entre les Parties

Est valide l'accord par lequel les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les différends qui pourront s'élever ou qui se sont élevés entre elles à propos d'une affaire commerciale.

L'accord susvisé sera constaté par écrit et signé par les parties; il peut être aussi constaté par échange de lettres, de télégrammes ou de communications par télex.

ARTICLE 2

Nomination des Arbitres

La désignation des arbitres doit être faite dans la forme convenue par les parties. Elle peut être déléguée à un tiers qui pourra être une personne physique ou une personne juridique.

Les arbitres peuvent être des nationaux ou des étrangers.

ARTICLE 3

Procédure Applicable

A défaut d'un accord exprès entre les parties, l'arbitrage sera effectué conformément aux règles de procédure de la Commission interaméricaine d'Arbitrage commercial.

ARTICLE 4

Exécution. Reconnaissance des Décisions Arbitrales

Les sentences arbitrales qui, aux termes de la loi ou selon la procédure en vigueur, sont sans appel, ont la force de chose définitivement jugée. L'exécution ou la reconnaissance peut en être exigée de la même manière que pour les décisions rendues par les tribunaux ordinaires, nationaux ou étrangers, conformément à la procédure de l'État où elles doivent être exécutées et aux dispositions des traités internationaux.

ARTICLE 5

Motifs de Refus de Reconnaissance

1. La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne peuvent être refusées sur la requête de la partie contre laquelle la sentence est invoquée que si cette partie prouve à l'autorité compétente de l'État où la reconnaissance et l'exécution sont demandées:
 - a. Que les parties au compromis arbitral étaient atteintes d'une incapacité quelconque en vertu de la loi qui leur est applicable ou que ledit compromis n'est pas valide selon la loi à laquelle les parties l'ont soumis, ou, si aucune stipulation n'est faite à cet égard, selon la loi de l'État où la sentence a été rendue; ou
 - b. Que la partie contre laquelle l'exécution de la sentence arbitrale est demandée n'a pas été dûment notifiée de la désignation de

- l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou n'a pu, pour toute autre raison, faire valoir ses moyens de défense; ou
- c. Que la sentence se réfère à un différend non visé dans l'accord aux termes duquel les parties sont convenues de recourir à l'arbitrage. Toutefois, si les parties du dispositif de la sentence qui se réfèrent aux questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées des autres parties, la reconnaissance et l'exécution pourront être accordées aux premières; ou
 - d. Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure arbitrale n'est pas conforme au compromis signé par les parties ou, si aucun compromis n'est intervenu, que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure arbitrale n'est pas conforme à la loi de l'État où a eu lieu l'arbitrage; ou
 - e. Que la sentence n'est pas encore obligatoire pour les parties, ou qu'elle a été annulée ou suspendue par une autorité compétente de l'État dans lequel, ou selon la loi duquel, elle a été rendue.
2. La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale peuvent être également refusées si l'autorité compétente de l'État où la reconnaissance et l'exécution sont demandées prouve:
- a. Que selon la loi de cet État, l'objet du différend ne peut être tranché par voie d'arbitrage; ou
 - b. Que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de l'État susvisé.

ARTICLE 6

Annulation ou Suspension de la Décision

Lorsque l'annulation ou la suspension de la sentence arbitrale a été demandée à l'autorité compétente prévue à l'article 5, paragraphe 1 e., l'autorité saisie de l'affaire peut, si elle le juge bon, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence.

Elle peut également, à la requête de la partie qui demande l'exécution, ordonner à l'autre partie de donner des garanties appropriées.

ARTICLE 7

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de l'Organisation des États Américains.

ARTICLE 8

Ratifications

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains.

ARTICLE 9

Adhésions

Tout autre État peut adhérer à la présente Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains.

ARTICLE 10

Entrée en Vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. Pour chaque État qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du deuxième instrument de ratification, la Convention entrera en vigueur trente

jours après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE 11

Multiplicité des Unités Territoriales

Lorsque le territoire d'un État partie comporte plusieurs unités où différentes législations régissent des questions qui font l'objet de la présente Convention, cet État peut, au moment de signer la Convention, la ratifier ou y adhérer, déclarer que celle-ci s'appliquera dans toutes ces unités territoriales, ou dans une seule ou dans plusieurs d'entre elles.

L'État en question a également la faculté de modifier sa position aux termes d'une déclaration postérieure qui mentionnera expressément l'unité territoriale ou les unités territoriales auxquelles s'appliquera désormais la Convention. Les déclarations postérieures seront notifiées au Secrétariat général de l'Organisation des États Américains et prendront effet trente jours après leur réception.

ARTICLE 12

Durée

La présente Convention aura une durée indéfinie; toutefois, chacun des États parties pourra la dénoncer. L'instrument de dénonciation sera déposé auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains. À l'expiration de l'année qui suit le dépôt de l'instrument de dénonciation, la Convention cessera de produire ses effets à l'égard de l'État qui l'aura dénoncée, mais demeurera en vigueur à l'égard des autres États parties.

ARTICLE 13

Instruments Originaux. Langues

L'original de la présente Convention, dont les textes français, anglais, espagnol et portugais font également foi, sera déposé auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains, lequel notifiera aux États membres de l'Organisation des États Américains et aux États qui auront adhéré à la Convention les signatures, dépôts d'instruments de ratification, d'adhésion et de dénonciation ainsi que les réserves, s'il y en a, relatives à la Convention. Il leur transmettra également les déclarations prévues à l'article 11 de la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, signent la présente Convention.

FAIT EN LA VILLE DE PANAMA, République de Panama, le trente janvier mil neuf cent soixante-quinze.

CONVENTION INTERAMÉRICAINNE SUR L'EFFICACITÉ EXTRATERRITORIALE DES DÉCISIONS ET SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES

(Signée à Montevideo, Uruguay le 10 Mai 1979, lors de la Deuxième Conférence spécialisée interaméricaine de droit international privé)



CONVENTION INTERAMÉRICAINNE SUR L'EFFICACITÉ EXTRATERRITORIALE DES DÉCISIONS ET SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES

*(Signée à Montevideo, Uruguay le 10 Mai 1979, lors de la Deuxième
Conférence spécialisée interaméricaine de droit international privé)*

Les Gouvernements des États membres de l'Organisation des États Américains,

CONSIDÉRANT que l'administration de la justice dans les États américains exige de ceux-ci une coopération mutuelle visant à assurer l'efficacité extraterritoriale des décisions et sentences arbitrales rendues dans leurs juridictions respectives, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE 1

Application

La présente Convention est applicable aux décisions judiciaires et aux sentences arbitrales, rendues dans les instances civiles et commerciales, ou en matière de questions de travail, dans l'un des États parties, à moins que, lors de la ratification de la Convention, l'État en question n'ait formulé une réserve expresse aux termes de laquelle il limite l'application de celle-ci aux jugements condamnatoires portant sur des droits patrimoniaux. De même, chacun de ces États peut déclarer, au moment de la ratifier, que la Convention s'applique aussi aux jugements qui mettent fin à une instance, aux décisions qui sont rendues par les autorités dans l'exercice de leur juridiction, ainsi qu'aux décisions pénales, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation des dommages causés par le délit.

Les règles de la présente Convention sont applicables aux sentences arbitrales dans le silence de la Convention interaméricaine sur l'Arbitrage commercial international souscrite à Panama le 30 janvier 1975.

ARTICLE 2

Conditions de fond

Les décisions et sentences arbitrales étrangères visées à l'article premier n'ont d'efficacité extraterritoriale dans les États parties que si:

- a. Ont été remplies toutes les conditions de forme requises pour qu'elles soient considérées comme des actes authentiques dans l'État d'où elles émanent;
- b. Les actes en question et les documents qui y sont annexés et sont nécessaires aux termes de la présente Convention ont été dûment traduits dans la langue officielle de l'État où ils doivent produire leurs effets;
- c. Les actes en question ont été dûment légalisés en conformité de la loi de l'État où ils doivent produire leurs effets;
- d. Le juge ou le tribunal qui a rendu la décision ou la sentence a la compétence internationale voulue pour connaître de la question en litige et statuer sur elle conformément à la législation de l'État où les actes susvisés doivent produire leurs effets;
- e. Le défendeur a été notifié, ou a été assigné, dans des formes légales substantiellement équivalentes à celles prévues par

la loi de l'État où les actes en question doivent produire leurs effets;

- f. La défense des parties a été assurée;
- g. Les actes en question sont exécutoires, ou le cas échéant ont force de chose jugée, dans l'État d'où ils émanent;
- h. Les actes en question ne sont pas manifestement contraires aux principes et aux lois d'ordre public de l'État où la reconnaissance ou l'exécution est demandée.

ARTICLE 3

Conditions de Forme

Toute demande d'exécution de décisions et de sentences arbitrales doit être nécessairement accompagnée des pièces à l'appui ci-après:

- a. Une expédition de la décision ou de la sentence arbitrale;
- b. Une copie certifiée conforme des pièces attestant que les dispositions des alinéas e) et f) de l'article précédent ont été observées;
- c. Une expédition de l'acte juridictionnel déclarant que la décision ou la sentence arbitrale est exécutoire ou a force de chose jugée.

ARTICLE 4

L'efficacité Totale ou Partielle

Si une décision ou une sentence arbitrale étrangères ne peuvent pas être déclarées efficaces dans leur totalité, le juge ou le tribunal saisi peut en admettre l'efficacité partielle sur demande de toute partie intéressée.

ARTICLE 5

Dispense des Frais

L'assistance judiciaire octroyée dans l'État d'origine de la décision sera accordée dans l'État où est sollicitée la reconnaissance de cette décision.

ARTICLE 6

Procédure Applicable

Les procédures, notamment la compétence des juridictions respectives, visant à assurer l'efficacité de décisions et sentences arbitrales étrangères, sont régies par le droit de l'État où l'exécution est demandée.

ARTICLE 7

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de l'Organisation des États Américains.

ARTICLE 8

Ratifications

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains.

ARTICLE 9

Adhésions

Tout autre État peut adhérer à la présente Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains.

ARTICLE 10

Réserves

Chaque État peut formuler des réserves sur la présente Convention au moment de la signer, de la ratifier, ou d'y adhérer, à condition que

la réserve concerne une ou plusieurs dispositions spécifiques et ne soit pas incompatible avec l'objet et les fins de la Convention.

ARTICLE 11

Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.

Pour chaque État qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du deuxième instrument de ratification, la Convention entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE 12

Multiplicité des Unités Territoriales

Lorsque le territoire d'un État partie comporte plusieurs unités où différentes législations régissent les questions qui font l'objet de la présente Convention, cet État peut, au moment de signer la Convention, de la ratifier ou d'y adhérer, déclarer que celle-ci s'appliquera dans toutes ces unités territoriales, ou dans une seule ou dans plusieurs d'entre elles.

L'État en question a également la faculté de modifier sa position aux termes d'une déclaration postérieure qui mentionnera expressément l'unité territoriale ou les unités territoriales auxquelles s'appliquera désormais la Convention. Les déclarations postérieures seront notifiées au Secrétariat général de l'Organisation des États Américains et prendront effet trente jours après leur réception.

ARTICLE 13

Dénonciation

La présente Convention aura une durée indéfinie. Toutefois, chacun des États parties pourra la dénoncer. L'instrument de dénonciation sera déposé auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains. À l'expiration de l'année qui suit le dépôt de l'instrument de dénonciation, la Convention cessera de produire ses effets à l'égard de l'État qui l'aura dénoncée mais demeurera en vigueur à l'égard des autres États parties.

ARTICLE 14

Dépôt, Signature et Ratification

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, espagnol, français, et portugais font également foi, sera déposé auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains, lequel en enverra copie certifiée conforme au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Secrétariat général de l'Organisation des États Américains notifiera aux États membres de cette Organisation et aux États qui auront adhéré à la Convention les signatures, dépôts d'instruments de ratification, d'adhésion et de dénonciation, ainsi que les réserves, s'il y en a, relatives à la Convention. Il leur transmettra également les déclarations prévues à l'article 12 de la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT À MONTEVIDEO, République orientale de l'Uruguay, le huit mai mil neuf cent soixante-dix-neuf.

Dates de ratifications par les États membres de l'OEA des Conventions d'Arbitrage Commercial International

MEMBRES DE L'ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS	CONVENTION INTERAMÉRICAINNE SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL (CONVENTION DE PANAMA DE 1975)	CONVENTION INTERAMÉRICAINNE SUR L'EFFICACITÉ EXTRATERRITORIALE DES DÉCISIONS ET SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES (CONVENTION DE MONTEVIDEO DE 1979)	CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES (CONVENTION DE NEW YORK DE 1958)
Antigua et Barbuda	-	-	02/02/1989
Argentine	11/03/1994	11/07/1983	14/03/1989
Bahamas	-	-	20/12/2006
Barbade	-	-	16/03/1993
Belize	-	-	-
Bolivie	10/08/1998	05/15/1998	28/04/1995
Brésil	08/31/1995	08/31/1995	07/06/2002
Canada	-	-	12/05/1986
Chili	04/08/1976	-	04/09/1975
Colombie	11/18/1986	06/24/1981	25/09/1979
Costa Rica	01/02/1978	-	26/10/1987
Dominique	-	-	28/10/1988
Équateur	08/06/1991	05/05/1982	03/01/1962
El Salvador	06/27/1980	-	26/02/1998
États-Unis	11/10/1986	-	30/09/1970
Grenade	-	-	-
Guatemala	07/07/1986	-	21/03/1984
Guyana	-	-	-
Haïti	-	-	05/12/1983
Honduras	01/08/1979	-	03/10/2000
Jamaïque	-	-	10/07/2002
Mexique	02/15/1978	02/11/1987	14/04/1971
Nicaragua	07/15/2003	-	24/09/2003
Panama	11/11/1975	-	10/10/1984
Paraguay	12/02/1976	07/05/1985	08/10/1997
Pérou	05/02/1989	04/09/1980	07/07/1988
République dominicaine	02/11/2008	-	11/04/2002
Saint-Kitts-et-Nevis	-	-	-
Sainte-Lucie	-	-	-
Saint-Vincent-et-Grenadines	-	-	12/09/2000
Suriname	-	-	-
Trinité-et-Tobago	-	-	14/02/1966
Uruguay	03/29/1977	02/12/1980	30/03/1983
Vénézuéla	03/22/1985	01/30/1985	08/02/1995

Source: Préparé par le Département de droit international de l'Organisation des États Américains.

ANNEXE - CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES

(Signée à New York, États-Unis, le 10 Juin 1958)



ANNEXE - CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES

(Signée à New York, États-Unis, le 10 Juin 1958)

ARTICLE I

1. La présente Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un État autre que celui où la reconnaissance et l'exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s'applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l'État où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.
2. On entend par «sentences arbitrales» non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.
3. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d'y adhérer ou de faire la notification d'extension prévue à l'article X, tout État pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu'il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules sentences rendues sur le territoire d'un autre État contractant. Il pourra également déclarer qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.

ARTICLE II

1. Chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage.
2. On entend par «convention écrite» une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes.
3. Le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée.

ARTICLE III

Chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales.

ARTICLE IV

- I. Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en même temps que la demande :
 - a. L'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;
 - b. L'original de la convention visée à l'article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.
2. Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.

ARTICLE V

- I. La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve:
 - a. Que les parties à la convention visée à l'article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou
 - b. Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou
 - c. Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l'arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées; ou
 - d. Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu; ou
 - e. Que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue.
2. La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate :
 - a. Que, d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; ou
 - b. Que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays.

ARTICLE VI

Si l'annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l'autorité compétente visée à l'article V, paragraphe I, e, l'autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l'estime

approprié, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l'exécution de la sentence, ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables.

ARTICLE VII

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les États contractants en matière de reconnaissance et d'exécution de sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée.
2. Le Protocole de Genève de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage et la Convention de Genève de 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs effets entre les États contractants du jour, et dans la mesure, où ceux-ci deviendront liés par la présente Convention.

ARTICLE VIII

1. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 décembre 1958 à la signature de tout État Membre des Nations Unies, ainsi que de tout autre État qui est, ou deviendra par la suite, membre d'une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ou qui aura été invité par l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE IX

1. Tous les États visés à l'article VIII peuvent adhérer à la présente Convention.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE X

1. Tout État pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.
2. Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification, ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État si cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s'applique pas à la date de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre les mesures voulues pour étendre la Convention à ces territoires, sous réserve le cas échéant, lorsque des motifs constitutionnels l'exigeront, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires.

ARTICLE XI

Les dispositions ci-après s'appliqueront aux États fédératifs ou non unitaires :

- a. En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes que celles des États contractants qui ne sont pas des États fédératifs;
- b. En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative de chacun des États ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des États ou provinces constituants;
- c. Un État fédératif Partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre État contractant qui lui aura été transmise par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

ARTICLE XII

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE XIII

1. Tout État contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date où le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.
2. Tout État qui aura fait une déclaration ou une notification conformément à l'article X pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
3. La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou d'exécution aura été entamée avant l'entrée en vigueur de la dénonciation.

ARTICLE XIV

Un État contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d'autres États contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d'appliquer cette convention.

ARTICLE XV

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l'article VIII :

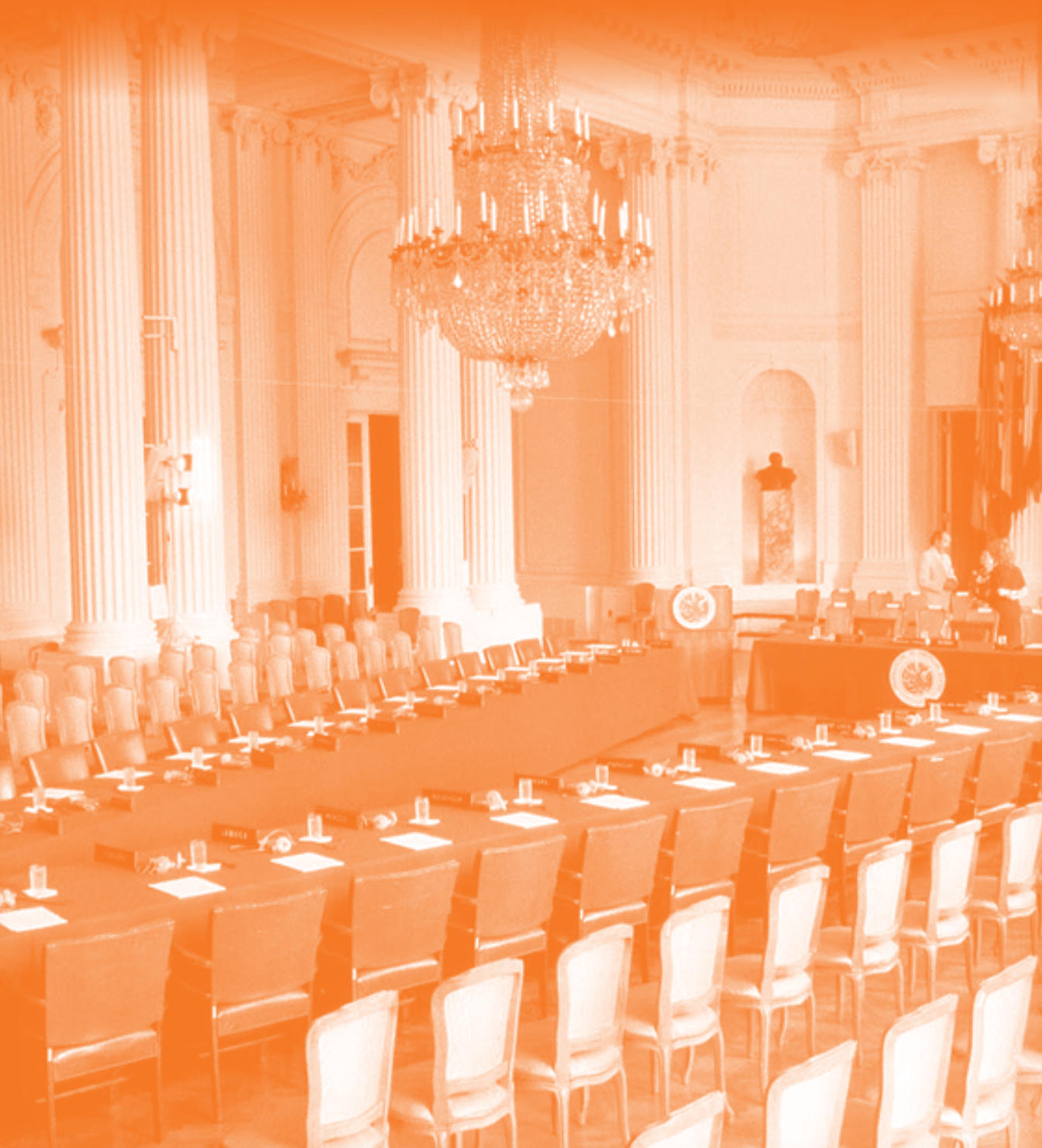
- a. Les signatures et ratifications visées à l'article VIII;
- b. Les adhésions visées à l'article IX;
- c. Les déclarations et notifications visées aux articles premier, X et XI;

- d. La date où la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article XII;
- e. Les dénonciations et notifications visées à l'article XIII.

ARTICLE XVI

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme de la présente Convention aux États visés à l'article VIII.

Português



PREFACIAR

O Departamento de Direito Internacional (DDI) da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Organização dos Estados Americanos (OEA) apresenta neste compêndio as convenções interamericanas que regulam questões referentes à arbitragem comercial internacional e ao reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Entre elas encontram-se a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional, firmada no Panamá, em 30 de janeiro de 1975, no âmbito da Primeira Conferência Especializada Interamericana sobre Direito Internacional (CIDIP), e a Convenção Interamericana sobre a Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros, firmada em Montevideu, Uruguai, em 8 de maio de 1979, na Segunda CIDIP.

O propósito desta edição consiste na divulgação da estrutura jurídica interamericana, promovendo seu conhecimento em prol do desenvolvimento do Direito Internacional, buscando dessa maneira ampliar sua aplicação no âmbito do ordenamento interno dos Estados membros. Esta publicação se enquadra nas atividades do projeto de cooperação técnica, do qual o DDI é encarregado, intitulado *“Arbitragem Comercial, Formação de oficiais de justiça na execução de sentenças arbitrais internacionais”*, o qual vem sendo desenvolvido com o apoio do Programa de Cooperação CIDA/OEA/2012-2015. Essa iniciativa busca aumentar e consolidar o conhecimento dos juízes civis e comerciais, bem como de outros funcionários públicos do Hemisfério, a respeito dos sistemas de solução de controvérsias internacionais comerciais e da execução de decisões e laudos arbitrais comerciais internacionais. Cabe destacar que atualmente a arbitragem comercial internacional é o meio mais utilizado para resolver controvérsias privadas no plano local e internacional, devido ao seu amplo alcance, confidencialidade, agilidade e flexibilidade na resolução de divergências entre comerciantes no âmbito das relações econômicas internacionais contratuais.

O objetivo do projeto de cooperação que deu origem a esta publicação está em conformidade com os próprios objetivos da OEA, pois a Carta da Organização estabelece expressamente no artigo 18, sob o título “Direitos e deveres fundamentais dos Estados”, que “o respeito e a observância fiel dos tratados constituem norma para o desenvolvimento das relações pacíficas entre os Estados”; e o artigo 30 consagra o compromisso dos Estados membros, que “inspirados nos princípios de solidariedade e cooperação interamericanas, comprometem-se a unir seus esforços no sentido de que impere a justiça social internacional em suas

relações e de que seus povos alcancem um desenvolvimento integral, condições indispensáveis para a paz e a segurança”.

Além disso, encontra apoio na Declaração do Panamá sobre a Contribuição Interamericana para o Desenvolvimento e Codificação do Direito Internacional, de 1996, mediante a qual a Assembléia Geral declarou seu mais firme e renovado compromisso de continuar impulsionando o desenvolvimento progressivo do direito internacional interamericano, bem como do Programa Interamericano para o Desenvolvimento do Direito Internacional, o qual vem sendo implementado por intermédio do DDI desde aquele ano, em conformidade com o mandato. Esse Programa tem por base o reconhecimento do valioso patrimônio jurídico constituído pelos tratados multilaterais adotados no âmbito da OEA, que deve ser preservado e divulgado amplamente.

Em conformidade com esses princípios, entre as funções do DDI está a de elaborar, coordenar e divulgar estudos e pesquisas relativas ao desenvolvimento e codificação do Direito Internacional público e privado, bem como a de apoiar, mediante estudos e documentos, as atividades voltadas para a unificação e harmonização das legislações dos Estados membros na área do Direito Internacional público e privado, inclusive os aspectos jurídicos da integração econômica no âmbito regional.

¹ AG/DEC. 12 (XXVI-O/96), “Declaração do Panamá sobre a Contribuição Interamericana para o Desenvolvimento e Codificação do Direito Internacional”, aprovada na sexta sessão plenária da Assembléia Geral reunida em 5 de junho de 1996, na Cidade do Panamá, Panamá.

² AG/RES. 1471 (XXVII-O/97), “Programa Interamericano para o Desenvolvimento do Direito Internacional”, aprovada na sétima sessão plenária da Assembléia Geral reunida em 5 de junho de 1997, em Lima, Peru.

CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL

(Assinada no Panamá, em 30 de janeiro de 1975, na Primeira Conferência Especializada Interamericana sobre Direito Internacional Privado)



CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL

(Assinada no Panamá, em 30 de janeiro de 1975,
na Primeira Conferência Especializada Interamericana
sobre Direito Internacional Privado)

Os Governos dos Estados membros da Organização dos Estados Americanos, desejosos de concluir uma convenção sobre arbitragem comercial internacional, convieram no seguinte:

Acordo das Partes

ARTIGO 1

É válido o acordo das partes em virtude do qual se obrigam a submeter à decisão arbitral as divergências que possam surgir ou que tenham surgido entre elas com relação a um negócio de natureza mercantil. O respectivo acordo constará do documento assinado pelas partes, ou da troca de cartas, telegramas ou comunicações por telex.

Nomeação de Árbitros

ARTIGO 2

A nomeação dos árbitros será feita na forma em que convierem as partes. Sua designação poderá ser delegada a um terceiro, seja esta pessoa física ou jurídica.

Os árbitros poderão ser nacionais ou estrangeiros.

Regras Aplicáveis

ARTIGO 3

Na falta de acordo expresso entre as partes, a arbitragem será efetuada de acordo com as normas de procedimento da Comissão Interamericana de Arbitragem Comercial.

Executoriedade. Reconhecimento de Laudos

ARTIGO 4

As sentenças ou laudos arbitrais não impugnáveis segundo a lei ou as normas processuais aplicáveis terão força de sentença judicial definitiva. Sua execução ou reconhecimento poderão ser exigidos da mesma maneira que os das sentenças proferidas por tribunais comuns nacionais ou estrangeiros, segundo as leis processuais do país onde forem executadas e o que seja estabelecido a esse respeito por tratados internacionais.

Motivos para a Recusa de Reconhecimento

ARTIGO 5

1. Somente poderão ser denegados o reconhecimento e a execução da sentença por solicitação da parte contra a qual for invocada, se esta provar perante a autoridade competente do Estado em que forem pedidos o reconhecimento e a execução:
 - a) que as partes no acordo estavam sujeitas a alguma incapacidade em virtude da lei que lhes é aplicável, ou que tal acordo não é válido perante a lei a que as partes o tenham submetido, ou se nada tiver sido indicado a esse respeito, em virtude da lei do país em que tenha sido proferida a sentença; ou

- b) que a parte contra a qual se invocar a sentença arbitral não foi devidamente notificada da designação do árbitro ou do processo de arbitragem, ou não pôde, por qualquer outra razão, fazer valer seus meios de defesa; ou
 - c) que a sentença se refere a uma divergência não prevista no acordo das partes de submissão ao processo arbitral; não obstante, se as disposições da sentença que se referem às questões submetidas à arbitragem puderem ser isoladas das que não foram submetidas à arbitragem, poder-se-á reconhecer e executar as primeiras; ou
 - d) que a constituição do tribunal arbitral ou o processo arbitral não se ajustaram ao acordo celebrado entre as partes ou, na falta de tal acordo, que a constituição do tribunal arbitral ou o processo arbitral não se ajustaram à lei do Estado onde se realizou a arbitragem; ou
 - e) que a sentença não é ainda obrigatória para as partes ou foi anulada ou suspensa por uma autoridade competente do Estado em que, ou em conformidade com cuja lei, foi proferida essa sentença.
2. Poder-se-á também denegar o reconhecimento e a execução de uma sentença arbitral, se a autoridade competente do Estado em que se pedir o reconhecimento e a execução comprovar:
- a) que, segundo a lei desse Estado, o objeto da divergência não é suscetível de solução por meio de arbitragem; ou
 - b) que o reconhecimento ou a execução da sentença seriam contrários à ordem pública desse Estado.

ARTIGO 6

Anulação ou Suspensão da Sentença

Se forem pedidas à autoridade competente mencionada no artigo 5, parágrafo I, e, a anulação ou a suspensão da sentença, a autoridade perante a qual se invocar a referida sentença poderá, se o considerar procedente, adiar a decisão sobre a execução da sentença e, a instância da parte que pedir a execução, poderá também ordenar à outra parte que apresente as garantias apropriadas.

ARTIGO 7

Assinatura

Esta Convenção ficará aberta à assinatura dos Estados membros da Organização dos Estados Americanos.

ARTIGO 8

Ratificações

Esta Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.

ARTIGO 9

Adesões

Esta Convenção ficará aberta à adesão de qualquer outro Estado. Os instrumentos de adesão serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.

Entrada em Vigor**ARTIGO 10**

Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que haja sido depositado o segundo instrumento de ratificação.

Para cada Estado que ratificar a Convenção ou a ela aderir depois de haver sido depositado o segundo instrumento de ratificação, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que esse Estado haja depositado seu instrumento de ratificação ou de adesão.

Multiplicidade de Unidades Territoriais**ARTIGO 11**

Os Estados Partes que tenham duas ou mais unidades territoriais em que vigorem sistemas jurídicos diferentes com relação a questões de que trata esta Convenção poderão declarar, no momento da assinatura, ratificação ou adesão, que a Convenção aplicar-se-á a todas as suas unidades territoriais ou somente a uma ou mais delas.

Essas declarações poderão ser modificadas mediante declarações posteriores, que especificarão expressamente a ou as unidades territoriais a que se aplicará esta Convenção. Essas declarações posteriores serão transmitidas à Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos e surtirão efeito trinta dias depois de recebidas.

Vigencia**ARTIGO 12**

Esta Convenção vigorará por prazo indefinido, mas qualquer um dos Estados Partes poderá denunciá-la. O instrumento de denúncia será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Transcorrido um ano, contado a partir da data do depósito do instrumento de denúncia, cessarão os efeitos da Convenção para o Estado denunciante, continuando ela subsistente para os demais Estados Partes.

Instrumentos Originais. Idiomas**ARTIGO 13**

O instrumento original desta Convenção, cujos textos em português, espanhol, francês e inglês são igualmente autênticos, será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. A referida Secretaria notificará aos Estados membros da Organização dos Estados Americanos, e aos Estados que houverem aderido à Convenção, as assinaturas e depósitos de instrumentos de ratificação, de adesão e de denúncia, bem como as reservas que houver. Do mesmo modo, transmitirá a esses Estados as declarações previstas no artigo 11 desta Convenção.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários infra-assinados, devidamente autorizados por seus respectivos Governos, firmam esta Convenção.

FEITA NA CIDADE DO PANAMÁ, República do Panamá, no dia trinta de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco.

CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE EFICÁCIA EXTRATERRITORIAL DAS SENTENÇAS E LAUDOS ARBITRAIS ESTRANGEIROS

**(Assinada em Montevideu, Uruguai, em 8 de maio de 1979,
na Segunda Conferência Especializada Interamericana
sobre Direito Internacional Privado)**



CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE EFICÁCIA EXTRATERRITORIAL DAS SENTENÇAS E LAUDOS ARBITRAIS ESTRANGEIROS

(Assinada em Montevideu, Uruguai, em 8 de maio de 1979, na Segunda Conferência Especializada Interamericana sobre Direito Internacional Privado)

Os Governos dos Estados membros da Organização dos Estados Americanos,

CONSIDERANDO que a administração da justiça nos Estados americanos requer sua cooperação mútua a fim de assegurar a eficácia extraterritorial das sentenças e laudos arbitrais proferidos em suas respectivas jurisdições territoriais, convieram no seguinte:

ARTIGO 1

Aplicação

Esta Convenção aplicar-se-á às sentenças judiciais e laudos arbitrais proferidos em processos civis, comerciais ou trabalhistas em um dos Estados Partes, a menos que no momento da ratificação seja feita por algum destes reserva expressa de limitá-la às sentenças condenatórias em matéria patrimonial. Qualquer deles poderá, outrossim, declarar, no momento da ratificação, que se aplica também às decisões que ponham termo ao processo, às tomadas por autoridades que exerçam alguma função jurisdicional e às sentenças penais naquilo em que digam respeito à indenização de prejuízos decorrentes do delito.

As normas desta Convenção aplicar-se-ão, no tocante a laudos arbitrais, a tudo o que não estiver previsto na Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional, assinada no Panamá, em 30 de janeiro de 1975.

ARTIGO 2

Requisitos Substantivos

As sentenças, os laudos arbitrais e as decisões jurisdicionais estrangeiros a que se refere o artigo 1 terão eficácia extraterritorial nos Estados Partes, se as seguintes condições forem reunidas:

- a) se vierem revestidos das formalidades externas necessárias para que sejam considerados autênticos no Estado de onde provenham;
- b) se a sentença, o laudo e a decisão jurisdicional, e os documentos anexos que sejam necessários de acordo com esta Convenção, estiverem devidamente traduzidos para o idioma oficial do Estado onde devam surtir efeito;
- c) se forem apresentados devidamente legalizados de acordo com a lei do Estado onde devam surtir efeito;
- d) se o juiz ou tribunal sentenciador tiver competência na esfera internacional para conhecer do assunto e julgá-lo de acordo com a lei do Estado onde devam surtir efeito;
- e) se o demandado tiver sido notificado ou citado na devida forma legal de maneira substancialmente equivalente àquela admitida pela lei do Estado onde a sentença, laudo e decisão jurisdicional devam surtir efeito;

- f) se se houver assegurado a defesa das partes;
- g) se tiverem o caráter de executáveis ou, conforme o caso, se tiverem passado em julgado no Estado em que houverem sido proferidas;
- h) se não contrariarem manifestamente os princípios e as leis de ordem pública no Estado em que se peça o reconhecimento ou o cumprimento.

ARTIGO 3

Requisitos Formais

Os documentos de comprovação indispensáveis para solicitar o cumprimento das sentenças, laudos e decisões jurisdicionais são os seguintes:

- a) cópia autenticada da sentença, laudo ou decisão jurisdicional;
- b) cópia autenticada das peças necessárias para provar que foi dado cumprimento às alíneas e, e f do artigo anterior;
- c) cópia autenticada do ato que declarar que a sentença ou o laudo têm o caráter de executável ou força de coisa julgada.

ARTIGO 4

Eficácia Total ou Parcial

Se uma sentença, laudo ou decisão jurisdicional estrangeiros não puderem ter eficácia na sua totalidade, o juiz ou tribunal poderá admitir sua eficácia parcial mediante pedido da parte interessada.

ARTIGO 5

Benefício da Justiça Gratuita

O benefício da justiça gratuita reconhecido no Estado de origem da sentença será mantido no de sua apresentação.

ARTIGO 6

Procedimentos Aplicáveis

Os procedimentos, inclusive a competência dos respectivos órgãos judiciários, para assegurar a eficácia das sentenças, laudos arbitrais e decisões jurisdicionais estrangeiros, serão regulados pela lei do Estado em que seja solicitado seu cumprimento.

ARTIGO 7

Assinatura

Esta Convenção ficara aberta à assinatura dos Estados membros da Organização dos Estados Americanos.

ARTIGO 8

Ratificações

Esta Convenção está sujeita à ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.

ARTIGO 9

Aderências

Esta Convenção ficara aberta à adesão de qualquer outro Estado. Os instrumentos de adesão serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.

ARTIGO 10

Reservas

Cada Estado poderá formular reservas a esta Convenção no momento de assiná-la, ratificá-la ou a ela aderir, desde que a reserva verse sobre uma ou mais disposições específicas e não seja incompatível com o objeto e fim da Convenção.

Entrada em Vigor

ARTIGO 11

Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que tenha sido depositado o segundo instrumento de ratificação.

Para cada Estado que ratificar a Convenção, ou a ela aderir, depois de haver sido depositado o segundo instrumento de ratificação, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que este Estado haja depositado seu instrumento de ratificação ou de adesão.

Multiplicidade de Unidades Territoriais

ARTIGO 12

Os Estados Partes que tenham duas ou mais unidades territoriais em que vigorem sistemas jurídicos diferentes com relação a questões de que trata esta Convenção, poderão declarar, no momento da assinatura, ratificação ou adesão, que a Convenção aplicar-se-á a todas as suas unidades territoriais ou somente a uma ou mais delas.

Essas declarações poderão ser modificadas mediante declarações ulteriores, que especificarão expressamente a ou as unidades territoriais a que se aplicara esta Convenção. Essas declarações ulteriores serão transmitidas à Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos e surtirão efeito trinta dias depois de recebidas.

Denúncia

ARTIGO 13

Esta Convenção vigorará por prazo indefinido, mas qualquer dos Estados Parte poderá denunciá-la. O instrumento de denúncia será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Transcorrido um ano, contado a partir da data do depósito do instrumento de denúncia, cessarão os efeitos da Convenção para o Estado denunciante, continuando ela subsistente para os demais Estados Partes.

Assinatura, Depósito e Ratificações

ARTIGO 14

O instrumento original desta Convenção, cujos textos em português, espanhol, francês e inglês são igualmente autênticos, será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, que enviará cópia autenticada de seu texto para o respectivo registro e publicação à Secretaria das Nações Unidas, em conformidade com o artigo 102 da sua Carta constitutiva. A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos notificará aos Estados membros da referida Organização, e aos Estados que houverem aderido a Convenção, as assinaturas e os depósitos de instrumentos de ratificação, de adesão e de denúncia, bem como as reservas que houver. Igualmente, transmitirá a esses Estados as declarações previstas no artigo 12 desta Convenção.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários infra-assinados, devidamente autorizados por seus respectivos Governos, firmam esta Convenção.

FEITA NA CIDADE DE MONTEVIDÉU, República Oriental do Uruguai, no dia oito de maio de mil novecentos e setenta e nove.

Datas das ratificações por parte dos Estados membros da OEA das Convenções sobre Arbitragem Comercial Internacional

ESTADOS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS	CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL (CONVENÇÃO DE PANAMÁ 1975)	CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE EFICÁCIA EXTRATERRITORIAL DAS SENTENÇAS E LAUDOS ARBITRAIS ESTRANGEIROS (CONVENÇÃO DE MONTEVIDÉU 1979)	CONVENÇÃO SOBRE O RECONHECIMENTO E A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS ARBITRAIS ESTRANGEIRAS (CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE 1958)
Antígua e Barbuda	-	-	02/02/1989
Argentina	11/03/1994	11/07/1983	14/03/1989
Bahamas	-	-	20/12/2006
Barbados	-	-	16/03/1993
Belize	-	-	-
Bolívia	10/08/1998	05/15/1998	28/04/1995
Brasil	08/31/1995	08/31/1995	07/06/2002
Canadá	-	-	12/05/1986
Chile	04/08/1976	-	04/09/1975
Colômbia	11/18/1986	06/24/1981	25/09/1979
Costa Rica	01/02/1978	-	26/10/1987
Dominica	-	-	28/10/1988
El Salvador	06/27/1980	-	26/02/1998
Equador	08/06/1991	05/05/1982	03/01/1962
Estados Unidos	11/10/1986	-	30/09/1970
Grenada	-	-	-
Guatemala	07/07/1986	-	21/03/1984
Guiana	-	-	-
Haiti	-	-	05/12/1983
Honduras	01/08/1979	-	03/10/2000
Jamaica	-	-	10/07/2002
México	02/15/1978	02/11/1987	14/04/1971
Nicarágua	07/15/2003	-	24/09/2003
Panamá	11/11/1975	-	10/10/1984
Paraguai	12/02/1976	07/05/1985	08/10/1997
Peru	05/02/1989	04/09/1980	07/07/1988
República Dominicana	02/11/2008	-	11/04/2002
Saint Kitts e Nevis	-	-	-
Santa Lúcia	-	-	-
São Vicente e Granadinas	-	-	12/09/2000
Suriname	-	-	-
Trinidad e Tobago	-	-	14/02/1966
Uruguai	03/29/1977	02/12/1980	30/03/1983
Venezuela	03/22/1985	01/30/1985	08/02/1995

Fonte: Elaborado pelo Departamento de Direito Internacional da Organização dos Estados Americanos.

Nota aclaratoria: Los títulos contenidos al margen de cada de uno de los artículos de las Convenciones Interamericanas contenidas en el presente volumen, no forman parte de sus versiones oficiales. Estos contenidos fueron incorporados por el Departamento de Derecho Internacional a fin de facilitar su consulta.

Disclaimer: The titles that are printed next to the articles of the Inter-American Conventions in this volume are not part of them in the official version. This additional content has been added by the Department of International Law for the sole purpose of facilitating research within the text.

Avertissement: les titres qui sont affichés à côté des articles des Conventions Interaméricaines dans ce volume, ne font pas partie du texte de la version officielle des dites conventions. Ce contenu a été ajouté par le Département de Droit International dans le seul but de faciliter la recherche dans le texte.

Nota de esclarecimento: Os títulos que se encontram ao lado de cada um dos artigos das Convenciones Interamericanas incluídas neste volume não fazem parte das mesmas em suas versões oficiais. Esses conteúdos foram inseridos pelo Departamento de Direito Internacional a fim de facilitar a busca de temas.

Esta publicación ha sido preparada y editada por el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, con la colaboración de Margaret Serrano, y de Philippe-Armand de Bonneval en el marco de la pasantía de verano e invierno, sesión 2012.

Copyright © 2012. Organización de los Estados Americanos (OEA). Reservados todos los derechos.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Secretaría General
19 th Street and Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20006
[http://HYPERLINK "www.oas.org" www.oas.org](http://HYPERLINK)

ISBN 978-0-8270-5886-6

**Departamento de Derecho Internacional
Secretaría de Asuntos Jurídicos
Organización de los Estados Americanos**

19th St. & Constitution Ave., N.W.
Suite ADM -233
Washington, D.C 20006

Contacto

Dil@oas.org | (202) 370 0743
[http://www.oas.org/es/sla/ddi/
derecho_internacional.asp](http://www.oas.org/es/sla/ddi/derecho_internacional.asp)

Visite nuestra
página web

